



JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD
Bello, quince (15) de diciembre de dos mil veintiuno (2021)

PROCESO	Acción de Tutela
ACCIONANTE	Diego Mauricio Jovel Plazas
ACCIONADO	Tecnológico de Antioquia, Consejo Municipal de Bello y Contraloría Municipal de Bello
RADICADO	05088 40 03 003 2021-01133 00
INSTANCIA	Primera
PROVIDENCIA	Sentencia No. 325 del 2021
TEMA Y SUBTEMA	1) La acción de tutela. 2) El acto de convocatoria como norma que regula el concurso de méritos. 3) Marco procedimental en el que se desarrolla el concurso público de méritos para proveer cargos de carrera administrativa. 4) El alcance y ejercicio del debido proceso. 5) caso concreto.
DECISIÓN	Deniega tutela por ausencia de vulneración de los derechos fundamentales reclamados.

Entra este Juzgado a dictar sentencia de primera instancia dentro de la acción de tutela incoada por el señor Diego Mauricio Jovel Plazas identificado con C.C. No. 98.573.123, quien actúa en causa propia, en procura de obtener el restablecimiento de sus derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, que considera vulnerados por el Tecnológico de Antioquia, el Consejo Municipal de Bello y la Contraloría Municipal de Bello.

I. ANTECEDENTES.

Fundamentos Fáticos.

1. El accionante afirma que mediante Resolución 091 de 27 de octubre de 2021 expedida por el Concejo Municipal de Bello, se realizó la convocatoria No. 002 del 2021 para el proceso de elección de Contraloría Municipal de Bello para el periodo 2022–2025, cuyas inscripciones se llevaron a cabo entre el 8 y 9 de noviembre de 2021.
2. Señala que el 22 de noviembre hogaño, se inscribió a la mencionada convocatoria y aportó la documentación requerida ante el Tecnológico de Antioquia, quien posteriormente, el 11 de noviembre de 2021 se encargó de entregar al Concejo Municipal de Bello la lista preliminar de admitidos y no admitidos.
3. Sostiene que al revisar la publicación del listado se enteró que no fue admitido porque no se había cumplido con el lleno de los requisitos exigidos en el certificado

laboral, *"No cumple: Certificaciones laborales funciones públicas por un periodo no inferior a dos años, con el lleno de los requisitos exigidos"*.

4. Manifiesta que, de acuerdo a la respuesta ofrecida frente a la reclamación presentada ante el Tecnológico de Antioquia, el único incumplimiento fue que, en el certificado laboral expedido por la Contraloría de Bello, faltó indicar el "Grado y Nivel ocupacional del cargo", y que realmente lo único que faltó fue el "Grado".

5. Expone que por lo anterior el 16 de noviembre de 2021, presentó reclamación ante el Tecnológico de Antioquia, arguyendo que en el Artículo 2.2.2.3.8 del Decreto 1083 de 2015 no es ningún requisito exigible, y por lo tanto considera que la Resolución 091 de 2021 del 27 de octubre de 2021 para la convocatoria 002 de 2021, está vulnerando el artículo 2.2.2.3.8 Certificación de la experiencia del Decreto 1083 de 2015.

6. Refiere que ante la no respuesta de la entidad accionada, el 18 de noviembre de 2021 nuevamente solicitó al Tecnológico de Antioquia, revisar las causales de inadmisión, las cuales considera haber cumplido.

7. Precisa que el 17 de noviembre de los corrientes el Tecnológico de Antioquia dio respuesta a la reclamación presentada el 16 de noviembre, pero hasta el momento no se ha pronunciado frente a la petición que elevó el 28 de noviembre de 2021.

8. Argumenta que el Tecnológico de Antioquia, claramente recibió la totalidad de la información en original, por ello, considera que la observación por la cual no fue admitido corresponde a un requisito meramente formal y no sustancial ni exigible en el artículo 2.2.2.3.8 Certificaciones de la experiencia del Decreto 1083 de 2015.

9. Itera que no entiende cómo al participante 15, a quien le faltaron documentos del artículo 12 de la Resolución 091 de 2021, y fueron no admitidos, luego pasa a ser admitido, sin evidencia alguna que estos los haya presentado en original y copia.

Pruebas.

El tutelante aporta como medios probatorios:

- a) Resolución 091 de 2021 mediante la cual se convoca al proceso de elección del Contralor Municipal de Bello (Convocatoria 002 de 2021).
- b) Lista preliminar de elegibles expedida por el Tecnológico de Antioquia y publicada por el Concejo de Bello.
- c) Lista definitiva de elegibles expedida por el Tecnológico de Antioquia y publicada por el Concejo de Bello.
- d) Correo electrónico de 16 de noviembre de 2021.
- e) Correo electrónico de 17 de noviembre de 2021, mediante el cual el Tecnológico de Antioquia dio contestación al correo de 16 de noviembre de 2021.
- f) Correo electrónico de 18 de noviembre de 2021.

Pretensiones.

El señor Diego Mauricio Jovel Plazas solicita se tutelen sus derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, que dice le ha sido vulnerado por las accionadas. En consecuencia, se ordene i) al Tecnológico de Antioquia y al Concejo Municipal de Bello, suspender el procedimiento de la Convocatoria 002 de 2021, mediante la cual se elegirá al Contralor Municipal de Bello; ii) al Tecnológico de Antioquia y al Concejo Municipal de Bello, continuar con la suspensión de la aplicación de las pruebas de conocimiento que desde el 21 de noviembre de 2021 se encuentran suspendidas; iii) al Tecnológico de Antioquia, revocar la lista definitiva de admitidos a la Convocatoria 002 de 2021 y, iv) al Tecnológico de Antioquia, incluirlo en la lista de admitidos por el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 12 de la Resolución 091 de 2021.

TRÁMITE Y RESPUESTA DE LA TUTELA

Como quiera que en el texto del líbelo se dio cumplimiento a la exigencia estipulada en el art. 14 e inciso 2° del artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, el día 01 de diciembre de 2021 fue admitida la acción de tutela, se denegó la medida provisional deprecada y se procedió a la notificación de todos los intervinientes, mediante oficios de la misma fecha.

Así mismo, mediante auto del 09 de diciembre se requirió al Tecnológico de Antioquia y al Concejo Municipal de Bello, para que dieran cumplimiento a lo dispuesto en el ordinal quinto del auto admisorio, esto es, *"al Tecnológico de Antioquia la notificación de la admisión de la presente acción de tutela a todos y cada uno de los miembros de la lista de admitidos para proveer el empleo denominado Contralor Municipal de Bello, quienes podrían verse afectados con las resultas de la acción constitucional, así como la publicación de la admisión de la presente acción de tutela en su página web y en la del Consejo Municipal de Bello, de manera que los interesados tenga la oportunidad de ejercer su derecho de defensa frente a las pretensiones del señor Diego Mauricio Jovel Plazas. Se les indicará, además que dicha respuesta deberán enviar la al correo electrónico j03cmpalbello@cendoj.ramajudicial.gov.co para lo cual disponen de cuarenta y ocho (48) horas, a partir de la publicación"*. Dicha actuación fue notificada a las entidades requeridas y demás intervinientes mediante oficios No. 4856, 4857, 4859, 4860 y 4861 de la fecha en comento.

Posteriormente, por auto del 10 de diciembre de 2021 y en atención a la solicitud deprecada por el accionante, se dispuso ordenar al Concejo Municipal de Bello y al Tecnológico de Antioquia que de manera inmediata procedieran con la suspensión temporal de la prueba escrita que se encontraba programada para el domingo 12 de diciembre de 2021 mediante Resolución 129 del 7 de diciembre de 2021, mientras se resolvía de fondo la presente acción Constitucional. Tal disposición fue notificada a todos los intervinientes mediante oficios 4883, 4884, 4885 y 4886 de la fecha.

Pronunciamiento de las entidades convocadas por pasiva a la presente acción:

- El accionado **Tecnológico de Antioquia**, indicó que los documentos presentados por el aspirante fueron revisados de acuerdo con las reglas establecidas en la Resolución 091 del 27 de octubre de 2021, de lo cual se determinó que el aspirante y hoy accionante, no cumplía con los requisitos previstos en el acto administrativo de convocatoria.

Sostuvo que dentro del término legal oportuno el accionante presentó la reclamación respectiva, frente a lo cual se le dio respuesta dentro de los términos descritos en la Resolución de Convocatoria y se procedió nuevamente a revisar en su integridad la documentación presentada al momento de la inscripción, y como resultado de ello, se le puso de presente que el numeral quinto del artículo 11 de la citada Resolución, determina que *"con la inscripción, el aspirante acepta todas las condiciones contenidas en esta convocatoria y en los respectivos reglamentos relacionados con el proceso de selección, además autoriza el tratamiento de los datos personales y da consentimiento informado para la aplicación de las pruebas escritas."*

Precisó que es deber del aspirante presentar la documentación como lo describe la Resolución, es decir, observando cada uno de los requisitos exigidos, pues la carga de la información la tiene este y no la institución o entidad donde presente la documentación como aspirante a un cargo, por lo tanto, tal como se evidenció, éste presentó las certificaciones laborales y contractuales, sin embargo, para la valoración de los requisitos mínimos de experiencia, la presentación de las certificaciones laborales no cumplieron con los requisitos exigidos en el artículo 13 de la precitada Resolución.

Argumentó que el Proceso Contencioso Administrativo no sólo es el mecanismo natural para resolver controversias como la planteada por el accionante, sino que además es un instrumento eficaz para resolver y tramitar sus pretensiones, al estar dotado de la posibilidad de adoptar medidas cautelares que permitan conjurar de manera inmediata situaciones de apremio; motivo por el cual el amparo constitucional debe ser negado por improcedente.

Puso de presente que el Tecnológico de Antioquia no ha realizado ninguna actuación que le vulnere el derecho a acceso a cargos públicos, pues no puede pretender la habilitación de su postulación cuando no acreditó los requisitos exigidos para la misma, menos aún se ha atentado contra su derecho a la igualdad, ni al debido proceso, pues queda claramente establecido que su aspiración fue evaluada, se procedió con el análisis y respuesta de la reclamación incoada, todo de acuerdo con lo regulado en la convocatoria pública.

En gracia de lo expuesto solicitó que la pretensión de la presente acción de tutela sea desestimada en la providencia que decida el asunto.

Posteriormente, mediante informe del 10 de diciembre de 2021, allegó las respectivas constancias de (i) la publicación del auto admisorio de la acción constitucional en su página web y la del Concejo de Bello; y (ii) el envío de la notificación del auto admisorio a los correos electrónicos de los aspirantes de la convocatoria.

- El accionado **Concejo Municipal de Bello**, manifestó que la Resolución N° 091 de octubre 27 de 2021, es un acto administrativo, que obliga tanto al Concejo Municipal de Bello, como al Tecnológico de Antioquia, y a los Aspirantes a ser evaluados dentro de la convocatoria, por consiguiente, la Resolución en mención debe haberse leído en su integridad, porque la misma es de aplicación integral, es así como en el artículo 11 numeral 5. se establece que: *"con la inscripción, el aspirante acepta todas las condiciones contenidas en esta convocatoria y en los respectivos reglamentos relacionados con el proceso de selección, además autoriza el tratamiento de los datos personales y da consentimiento informado para la aplicación de las pruebas escritas (...)"*.

Arguyó que el accionante no cumplió con la entrega de los requisitos para ser evaluada su experiencia, ya como el mismo lo certifica le faltó aportar en la certificación laboral el GRADO, y la no entrega de este requisito está inmersa en las causales de inadmisión o exclusión de la convocatoria, que en su numeral 5. *"No cumplir con los requisitos exigidos para el análisis de experiencia"*. Además, tal preceptiva estaba debidamente establecida y que sin discusión alguna fue debidamente acatada y entendida por los demás aspirantes, que si cumplieron con la misma, a excepción del actor.

Sostuvo que el requisito de entrega de los certificados laborales completos fueron debidamente establecidos en un acto administrativo que goza de presunción de legalidad y ejecutoriedad al tenor de lo establecido en el artículo 88 de la Ley 1437 de 2011; adicionalmente no se vislumbra un perjuicio irremediable que haga procedente la acción de tutela.

Por lo expuesto solicitó el que se declaré improcedente la acción de tutela.

De otro lado, en informe recibido el 10 de diciembre, dicha entidad informó que procedieron con la suspensión inmediata del cronograma previsto para el proceso de selección para proveer el cargo de Contralor Municipal consignado en la resolución N° 129 del 07 de diciembre de 2021, así como la realización de las pruebas de conocimiento, programadas para el 12 de diciembre de 2021.

Como prueba de lo anterior allegaron el comunicado radicado 000710 y el respectivo enlace de la publicación en el sitio web del Concejo de Bello: <https://www.concejodebello.gov.co/web/index.php/comunaciones/convocatorias/132-atencion-informacion-importante>

- La accionada **Contraloría Municipal de Bello**, estando debidamente notificada omitió allegar pronunciamiento alguno.

Agotado de esta manera, el trámite de la acción y reunidos los requisitos de forma previstos por los artículos 14 y 37 del Decreto Reglamentario 2591 de 1991, procede el Despacho a decidir el asunto sometido a su conocimiento con fundamento en las siguientes,

II. CONSIDERACIONES.

1. COMPETENCIA.

De conformidad con el art. 86 de la Constitución Política y el art. 37 del Decreto Reglamentario 2591 de 1991 este Juzgado es competente para conocer de la solicitud de amparo constitucional en referencia teniendo en cuenta la naturaleza jurídica de las entidades accionadas y el lugar donde ocurre la violación o amenaza de los derechos cuya protección se invoca.

2. PROBLEMA JURÍDICO.

Corresponde a este Juzgado determinar si al señor Diego Mauricio Jovel Plazas, se le han vulnerado sus derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, por parte de los accionadas Tecnológico de Antioquia, el Consejo Municipal de Bello y la Contraloría Municipal de Bello, al no incluirlo en la lista definitiva de admitidos a la Convocatoria 002 de 2021, cuando según éste, cumplió con los requisitos establecidos en el artículo 12 de la Resolución 091 de 2021.

Para encontrar una respuesta al problema ya indicado, acudiremos a lo que la Jurisprudencia de la Corte Constitucional ha decantado en materia de:

- 1) La acción de tutela.
- 2) El acto de convocatoria como norma que regula el concurso de méritos.
- 3) Marco procedimental en el que se desarrolla el concurso público de méritos para proveer cargos de carrera administrativa.
- 4) El alcance y ejercicio del debido proceso.
- 5) caso concreto.

2.1. LA ACCIÓN DE TUTELA.

La acción de tutela consagrada por el art. 86 de la Carta Política y reglamentada por el decreto 2591 de 1991, está concebida como un mecanismo residual, preferente y sumario, que tiene toda persona para reclamar la protección inmediata de sus

derechos fundamentales, cuando resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de la autoridad pública o particulares encargados de la prestación de un servicio público y demás aludidos en el inciso 5º de la norma superior en cita. Dentro de sus características, se resalta la subsidiaridad y residualidad, según la cual, la tutela sólo es procedente ante la carencia de otro medio judicial de protección, pues de existir este, debe acudirse a él, dado el carácter supletorio del amparo constitucional, de ahí que la Corte haya dicho:

*"... La justicia constitucional no puede operar como un mecanismo de protección paralelo y totalmente ajeno a los medios de defensa judiciales de carácter ordinario, sino que, por el contrario, se debe procurar una coordinación entre éstos, con el fin de que no ocurran interferencias indebidas e invasiones de competencia no consentidas por el Constituyente. Es precisamente la adecuada aplicación del principio de subsidiariedad lo que logra la articulación de los órganos judiciales en la determinación del espacio jurisdiccional respectivo..."¹. **"en virtud del principio de subsidiariedad de la tutela, los conflictos jurídicos relacionados con los derechos fundamentales deben ser, en principio, resueltos por las vías ordinarias, tanto jurisdiccionales y administrativas, y sólo es posible la procedencia de la acción de tutela cuando las mencionadas vías no resulten adecuadas para proteger los derechos del recurrente o cuando se trate de evitar la ocurrencia un perjuicio irremediable.** Es menester, entonces, determinar cuando el otro medio de protección es suficiente y eficaz para la protección de un derecho fundamental vulnerado, para lo cual la Corte ha desarrollado parámetros de aplicación, como lo son, "(a) el objeto del proceso judicial que se considera que desplaza a la acción de tutela" y "(b) el resultado previsible de acudir al otro medio de defensa judicial respecto de la protección eficaz y oportuna de los derechos fundamentales"² (Resaltos fuera del texto).*

2.2. EL ACTO DE CONVOCATORIA COMO NORMA QUE REGULA EL CONCURSO DE MÉRITOS.

El principio del mérito en el acceso a la función pública se encuentra instituido en el artículo 125³ superior, a fin de garantizar que en todos los órganos y entidades del Estado se vinculen las personas que ostenten las mejores capacidades. Como lo ha sostenido la Corte *"todos los empleos públicos tienen como objetivo común el mejor desempeño de sus funciones para la consecución de los fines del Estado"*⁴. Para tal efecto, el Legislador cuenta con la autonomía necesaria para determinar los

¹ Corte Constitucional. Sentencia T-575 de 1997 M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

² Corte Constitucional. Sentencia T-480/11.

³ *"Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley. Los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la Constitución o la ley, serán nombrados por concurso público."*

⁴ Cfr. Sentencia SU-086 de 1999: *"La Constitución de 1991 exaltó el mérito como criterio predominante, que no puede ser evadido ni desconocido por los nominadores, cuando se trata de seleccionar o ascender a quienes hayan de ocupar los cargos al servicio del Estado. Entendido como factor determinante de la designación y de la promoción de los servidores públicos, con las excepciones que la Constitución contempla (art. 125 C.P.), tal criterio no podría tomarse como exclusivamente reservado para la provisión de empleos en la Rama Administrativa del Poder Público, sino que, por el contrario, es, para todos los órganos y entidades del Estado, regla general obligatoria cuya inobservancia implica vulneración de las normas constitucionales y violación de derechos fundamentales."*

requisitos y condiciones del aspirante, sin entrar en contradicción con las normas constitucionales.

El concurso público ha sido el mecanismo establecido por la Carta Política para que en el marco de una actuación imparcial y objetiva⁵, haga prevalecer al mérito como el criterio determinante para proveer los distintos cargos en el sector público. Su finalidad es que se evalúen las capacidades, la preparación y las aptitudes generales y específicas de los distintos aspirantes a un cargo, para de esta manera escoger entre ellos al que mejor pueda desempeñarlo, dejando de lado cualquier aspecto de orden subjetivo⁶

Dicha actuación debe estar investida con todas las ritualidades propias del debido proceso⁷, lo que implica que se convoque formalmente mediante acto que contenga tanto de los requisitos exigidos para todos los cargos ofertados, como de las reglas específicas de las diversas etapas del concurso (la evaluación y la conformación de la lista de elegibles) a las que se verán sometidos los aspirantes y la propia entidad estatal⁸. Sobre el particular, este Tribunal señaló en la Sentencia SU-913 de 2009 que:

(i) Las reglas señaladas para las convocatorias son las leyes del concurso y son inmodificables, salvo que ellas sean contrarias a la Constitución, la ley o resulten violatorias de los derechos fundamentales.

(ii) A través de las normas obligatorias del concurso, la administración se autovincula y autocontrola, en el sentido de que debe respetarlas y que su actividad en cada etapa se encuentra previamente regulada.

(iii) Se quebranta el derecho al debido proceso y se infringe un perjuicio cuando la entidad organizadora del concurso cambia las reglas de juego aplicables y sorprende al concursante que se sujetó a ellas de buena fe. Si por factores exógenos aquellas varían levemente en alguna de sus etapas, las modificaciones de la convocatoria inicial deben ser plenamente conocidas por las partícipes para que de esta forma se satisfagan los principios de transparencia y publicidad que deben regir las actuaciones de la administración y no se menoscabe la confianza legítima que los participantes han depositado en los parámetros fijados para acceder a un cargo de carrera administrativa⁹.

(iv) Cuando existe una lista de elegibles que surge como resultado del agotamiento de las etapas propias del concurso de méritos, la persona que ocupa

⁵ Cfr. Sentencia SU-133 de 1998: “La finalidad del concurso estriba en últimas en que la vacante existente se llene con la mejor opción, es decir, con aquel de los concursantes que haya obtenido el más alto puntaje. A través de él se evalúa y califica el mérito del aspirante para ser elegido o nombrado”.

⁶ Cfr. Sentencia T-556 de 2010.

⁷ Cfr. Sentencia T-514 de 2001: “el debido proceso en los asuntos administrativos implica que el Estado se sujete a las reglas definidas en el ordenamiento jurídico, no solamente en las actuaciones que se adelanten contra los particulares para deducir responsabilidades de carácter disciplinario o aquellas relativas al control y vigilancia de su actividad, sino en los trámites que ellos inician con el objeto de cumplir una obligación o de ejercer un derecho ante la administración, como es el caso del acceso a los cargos públicos”.

⁸ Cfr. Sentencia T-090 de 2013.

⁹ Corte Constitucional en sentencia C-1040 de 2007

en ella el primer lugar, detenta un derecho adquirido en los términos del artículo 58 Superior que no puede ser desconocido.

En síntesis, la jurisprudencia constitucional ha expresado de manera uniforme y reiterada que los concursos – en tanto constituyen actuaciones adelantadas por las autoridades públicas – deberán realizarse con estricta sujeción *(i)* al derecho al debido proceso; *(ii)* al derecho a la igualdad y *(iii)* al principio de la buena fe¹⁰. Dicha obligación se traduce, en términos generales, en el imperativo que tiene la administración de ceñirse de manera precisa a las reglas del concurso ya que aquellas, como bien lo ha sostenido esta Corporación, constituyen “*ley para las partes*” que intervienen en él¹¹.

2.3. MARCO PROCEDIMENTAL EN EL QUE SE DESARROLLA EL CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS PARA PROVEER CARGOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA.

La Constitución de 1991, con las salvedades que ella misma indica, ha hecho del sistema de carrera el general y obligatorio para la provisión de cargos al servicio del Estado en todas sus ramas y órganos, para el ascenso dentro de la jerarquía de cada uno de ellos, para la permanencia de los empleados y para el retiro del servicio público

Lo que procura el orden jurídico mediante la exigencia de que se aplique el sistema de carrera y no la preferencia caprichosa del nominador en la selección, promoción y salida del personal que trabaja para el Estado, es por una parte la realización del principio constitucional de estabilidad en el empleo, por otra, la escogencia de los mejores servidores, en busca de la excelencia como meta esencial del servicio público, y, desde luego, el señalamiento del **mérito** como criterio fundamental que oriente a los directivos estatales acerca de la selección de quienes habrán de laborar en dicho servicio en sus distintas escalas¹².

La sentencia C-040 de 1995, reiterada en la SU-913 de 2009 y en la SU-446 de 2011, explicó cada una de esas fases, las que por demás fueron recogidas por el legislador en el artículo 31 de la Ley 909 de 2004. Así:

*"1. **Convocatoria.** es la norma reguladora de todo concurso y obliga tanto a la administración, como a las entidades contratadas para la realización del concurso y a los participantes. (Subrayas fuera de texto).*

*2. **Reclutamiento.** Esta etapa tiene como objetivo atraer e inscribir el mayor número de aspirantes que reúnan los requisitos para el desempeño de los empleos objeto del concurso.*

*3. **Pruebas.** Las pruebas o instrumentos de selección tienen como finalidad apreciar la capacidad, idoneidad y adecuación de los aspirantes a los diferentes empleos que se convoquen, así como establecer una clasificación de los candidatos respecto a las*

¹⁰ Sentencia T-502 de 2010.

¹¹ Sentencia SU-913 de 2009. Reiterada en la Sentencia T-569 de 2011.

¹² Sentencia SU-133 de 1998. M.P. José Gregorio Hernández Galindo

calidades requeridas para desempeñar con efectividad las funciones de un empleo o cuadro funcional de empleos.

La valoración de estos factores se efectuará a través de medios técnicos, los cuales deben responder a criterios de objetividad e imparcialidad.

4. Listas de elegibles. *Con los resultados de las pruebas se elaborará en estricto orden de mérito la lista de elegibles que tendrá una vigencia de dos (2) años. Con ésta y en estricto orden de mérito se cubrirán las vacantes para las cuales se efectuó el concurso.*

5. Período de prueba. *La persona no inscrita en carrera administrativa que haya sido seleccionada por concurso será nombrada en período de prueba, por el término de seis (6) meses, al final de los cuales le será evaluado el desempeño, de acuerdo con lo previsto en el reglamento.*

Aprobado dicho período, al obtener evaluación satisfactoria, el empleado adquiere los derechos de la carrera, los que deberán ser declarados mediante la inscripción en el Registro Público de la Carrera Administrativa. De no obtener calificación satisfactoria del período de prueba, el nombramiento del empleado será declarado insubsistente. (Subrayas fuera de texto).

De lo anterior, también se colige que el concurso público de méritos, que inspira el sistema de carrera administrativa, está compuesto por diversas etapas que buscan garantizar los derechos y principios fundamentales que la orientan, por lo que, a las entidades públicas, en todas las fases del proceso, no le es dado variarlas, por cuanto se afectarían principios básicos de nuestra organización, los derechos fundamentales de los asociados en general y de los participantes en particular¹³.

2.4. EL ALCANCE Y EJERCICIO DEL DEBIDO PROCESO.

El artículo 29 de la Constitución Política consagra el derecho fundamental al debido proceso, el cual, según el precepto "*se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas*". La jurisprudencia constitucional ha decantado el alcance del derecho fundamental al debido proceso como el deber de las autoridades, tanto judiciales como administrativas, de respetar y garantizar el ejercicio de los derechos de defensa y contradicción. Así mismo, lo ha definido como un principio inherente al Estado de Derecho que "*posee una estructura compleja y se compone por un plexo de garantías que operan como defensa de la autonomía y libertad del ciudadano, límites al ejercicio del poder público y barrera de contención a la arbitrariedad*"¹⁴.

Con base en ello, la Corte ha expresado que con la garantía del derecho al debido proceso administrativo se materializan a su vez otras prerrogativas constitucionales, tales como: (i) el principio de legalidad; (ii) el acceso a la jurisdicción y a la tutela judicial efectiva de los derechos humanos; (iii) a que se adelante por la autoridad competente y con pleno respeto de las formas propias de cada juicio definidas por el legislador; (iv) a que no se presenten dilaciones injustificadas; (v) el derecho de defensa y contradicción; (vi) el derecho de impugnación; y (vii) la publicidad de las

¹³ Sentencia T-257 de 2012 Corte Constitucional

¹⁴ Corte Constitucional, Sentencia C-248 de 2013.

actuaciones y decisiones adoptadas en los procedimientos¹⁵, entre otras. Estas garantías se interrelacionan, de tal forma que no pueden ser aplicadas de manera aislada en los procesos judiciales o administrativos, por ejemplo, el principio de publicidad constituye una condición para el ejercicio del derecho de defensa.

3. CASO CONCRETO.

El señor Diego Mauricio Jovel Plazas, quien actúa en causa propia, tal y como indicó en los antecedentes, solicita al Juez de tutela que ampare sus derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, que considera vulnerados por el Tecnológico de Antioquia, el Consejo Municipal de Bello y la Contraloría Municipal de Bello.

De las pruebas documentales allegadas, el Despacho advierte que el actor se presentó a la Convocatoria Pública para la elección del Contralor Municipal de Bello para el Periodo 2022-2025 (Convocatoria N° 002 de 2021).

Que el 11 de noviembre de los corrientes fue publicada lista de preliminar de admitidos y no admitidos para la elección de Contralor, en la que se advierte que el accionante no fue admitido porque *"No cumple: Certificaciones laborales funciones públicas por un periodo no inferior a dos años, con el lleno de los requisitos exigidos"*.

Que en razón a lo anterior el 16 de noviembre de 2021, el señor Diego Mauricio presentó reclamación ante el Tecnológico de Antioquia (ver correo electrónico).

Que ante la reclamación del actor, el Tecnológico de Antioquia procedió nuevamente a revisar la documentación presentada aquél al momento de la inscripción, y concluyó que el accionante no cumplió con todos los requisitos de la convocatoria, puntualmente con el Artículo 13 CONTENIDO DE LAS ACREDITACIONES, numeral 2.1, que prevé que además de los 2 años en funciones públicas las certificaciones laborales deben ser verificables, el "Grado y Nivel ocupacional del cargo". (ver constancia de envió de respuesta del 17/11/2021).

Que pese a la respuesta proferida por la institución educativa accionada, el actor señala que sí cumplió con el lleno de los requisitos exigidos en la Convocatoria, y es precisamente éste el motivo de su inconformidad y la razón por la que se vio abocado a acudir a la presente acción constitucional.

Así las cosas, luego de hacer una valoración de los fundamentos fácticos, las pruebas aportadas y los criterios jurisprudenciales citados en precedencia, considera el Despacho que la presente acción de tutela no tiene vocación de prosperidad, por las siguientes razones:

15 Sentencia C-035 de 2014

El artículo 272 de la Constitución Nacional, modificado por el artículo 4 del Acto Legislativo 04 de 2019, dispone que *"los Contralores departamentales, distritales y municipales serán elegidos por las Asambleas Departamentales, Concejos Municipales y Distritales de terna conformada por quienes obtengan los mayores puntajes en convocatoria pública conforme a la ley, siguiendo los principios de transparencia, publicidad, objetividad, participación ciudadana y equidad de género, para un periodo de cuatro años, que no podrá coincidir con el periodo del correspondiente gobernador o alcalde"*.

Por su parte el artículo 6 del acto legislativo 04 de 2019, prevé que la Contraloría de la República desarrollará los términos generales para el proceso de convocatoria pública de selección de los contralores departamentales, municipales y distritales. Es así como la Contraloría General de la República, en cumplimiento del Artículo 6° del Acto Legislativo 04 de 2019, emitió la Resolución 728 del 18 de noviembre de 2019, *"Por la cual se establecen los términos generales de las convocatorias públicas de selección de contralores territoriales"*.

De tal manera, se advierte que en el marco anterior se expidió la resolución 091 del 27 de octubre de 2021, emitida por el Consejo Municipal de Bello, por medio de la cual se dio apertura a la convocatoria pública 002 de 2021, para la elección de Contralor General de Bello, para el periodo Constitucional 2022-2025, la cual fue publicada en debida forma a través de la página del Concejo Municipal de Bello.

Deviene de lo anterior, que todos los requisitos contemplados en el acto administrativo 091 del 27 de octubre de 2021, gozan de plena validez y presunción de legalidad, motivo por el cual no es de recibo que ninguno de los aspirantes a través de la acción de tutela cuestione si los requisitos allí establecidos son formales o sustanciales, y menos aún si los requisitos establecidos dicha Resolución, hacen parte de una interpretación *"caprichosa"* de la Institución Universitaria, entre estos el citado artículo 13.

En ese orden de ideas, se denota que contrario a los manifestado por el accionante, la resolución 091 de octubre 27 de 2021, de manera clara disponía tanto, en su artículo 12 numeral 9¹⁶, como en el artículo 13 ibídem, la forma como habría de acreditarse la experiencia laboral. Requisito que no fue cumplido en debida forma por el actor y derivó en su inadmisión dentro de la lista de admitidos, conforme lo previsto por el numeral 5 del Artículo 9 de la convocatoria, esto es, *"No cumplir con los requisitos exigidos para el análisis de experiencia"*.

El requisito del contenido de las acreditaciones fue previamente establecido en un acto administrativo que, se itera, goza de presunción de legalidad a la luz de lo reglado en el artículo 88 de la ley 1437 de 2011, cuyo cumplimiento fue atendido por los otros aspirantes que fueron admitidos, y quienes acataron las reglas

¹⁶ "Certificaciones laborales por un periodo no inferior a dos años en funciones públicas".

previamente establecidas en marco del proceso de admisión para el cargo de Contralor de esta Municipalidad, pues al inscribirse al concurso todos los aspirantes aceptaron los términos de la convocatoria.

Por ello, esta Agencia Judicial no colige vulneración alguna a los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad invocados por el actor, habida cuenta que la inadmisión de aquél obedeció al incumplimiento de los requisitos preestablecidos en la resolución 091 de octubre 27 hogaño, cuyas exigencias no fueron cumplidas por el aspirante, puntualmente la enlistada en el numeral segundo del artículo 13, situación con la que también desconoció el numeral 6º del artículo 8¹⁷ y el numeral 5º del artículo 11¹⁸.

Es de advertir que la reclamación incoada por el accionante fue atendida por el Tecnológico de Antioquía, precisamente en aras de garantizar su debido proceso, situación por la que no es de recibo tan siquiera suponer que dicho derecho fue amenazado o cercenado. Adicionalmente, el Despacho considera que el señor Jovel Plazas, no fue puesto en condiciones desiguales con relación a los demás aspirantes al concurso de méritos, toda vez que los requisitos exigidos en la citada resolución se aplican a todos por igual, y por ello, no es posible suponer un trato desigual frente a otro concursante máxime cuando no existe prueba alguna que soporte este hecho.

Precisamente el Máximo Tribunal Constitucional ha señalado que: *"(...) la convocatoria se convierte en una expresión del principio de legalidad tanto para oferentes como para inscritos, de tal forma que incumplir las directrices allí estipuladas contraviene no solo los derechos de los aspirantes, sino aquel valor superior al cual está sujeto toda actuación pública. Dicho, en otros términos, el acto administrativo que la contenga funge como norma del concurso de méritos, por lo cual todos los intervinientes en el proceso deben someterse aquel so pena de trasgredir el orden jurídico imperante¹⁹."*

Así las cosas, se concluye que las actuaciones adelantadas por las entidades aquí convocadas no vulneraron, ni pusieron en riesgo los derechos fundamentales cuya protección pretende el actor, por el contrario, tanto el Tecnológico de Antioquia, como el Concejo de Bello, actuaron dentro del marco de sus funciones y hasta el momento han dado cabal cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Resolución 091 de octubre 27 de 2021. Motivo por el que se denegará la presente acción de tutela y se ordenará levantar la medida provisional decretada el 10 de diciembre de los corrientes.

¹⁷ Aceptar en su totalidad las reglas establecidas en la Convocatoria.

¹⁸ Con la inscripción, el aspirante acepta todas las condiciones contenidas en esta convocatoria y en los respectivos reglamentos relacionados con el proceso de selección, además autoriza el tratamiento de los datos personales y da consentimiento informado para la aplicación de las pruebas escritas.

¹⁹ Sentencia T-180/15

Ahora bien, en gracia de discusión, si el actor no estuviere de acuerdo con la postura asumida por Agencia Judicial, y por el contrario persiste en señalar que existió alguna irregularidad en el proceso de admisión suscitado con la referida convocatoria, éste tiene la posibilidad de acudir ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa en ejercicio del medio de control pertinente, para demandar el acto administrativo del cual se duele, y de esta manera satisfacer sus pretensiones, las cuales a todas luces resultan improcedentes en sede constitucional, al menos cuando no se prueba la existencia de un perjuicio irremediable, tal y como acaece en el asunto de marras.

De esta manera y por las razones antes expuestas, el **JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE BELLO**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

III RESUELVE:

PRIMERO: DENEGAR la acción de tutela interpuesta por el señor Diego Mauricio Jovel Plazas, identificada con C.C. No. 98.573.123, quien actúa en causa propia, en contra del Tecnológico de Antioquia, el Consejo Municipal de Bello y la Contraloría Municipal de Bello, por las razones expuestas.

SEGUNDO: LEVANTAR LA MEDIDA PROVISIONAL decretada mediante auto del 10 de diciembre de 2021, en consecuencia, continúese con el cronograma previsto en la Convocatoria 002 de 2021.

TERCERO: NOTIFICAR la decisión adoptada por el medio más idóneo a las partes, conforme lo prevé el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: De no ser recurrida en el término legal de tres (3) días contados a partir de la notificación, remítase estas diligencias a la CORTE CONSTITUCIONAL para su eventual revisión (Art. 31 Dto. 2591 de 1991).

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



SULY ELIZABETH PAZ ZAMBRANO

Jueza

DM